PLAZA PUBLICA

9-ENERO-1990

Miguel Angel Granados Chapa

La Perjudicial federal

Denuncias, denuncias, denuncias

El domingo empezó a transmitirse, por los canales de televisión norteamericanos servidos por la NBC, la serie *La guerra de las drogas*, basado en el libro *Desperados*, de Elaine Shannon. La serie acusa a agentes policiacos mexicanos de acciones delictuosas. Estas no ocurren sólo en las pantallas. Estamos hartos de comprobar día a día que el dilema de saber si es peor la delincuencia que los encargados de perseguirla parece imposible de resolver. Sobresale en tal sentido, hoy, la policía judicial federal, especialmente la encargada de combatir el narcotráfico, es decir, la que protagoniza la serie y el libro. ■ 4

En Tepic, la propia familia del gobernador Celso Delgado fue víctima de un allanamiento ilegal perpetrado por agentes de esa corporación. So pretexto de perseguir a un sospechoso, intimidaron a los guardias del domicilio, y entraron en la casa, a sabiendas de quién era la ocupante: la propia madre del gobernador. El hecho pudo no ser casual, pues días antes —el episodio narrado tuvo lugar el 28 de diciembre— se había difundido una carta abierta en que la diputación permanente de la legislatura local enumeraba arbitrariedades cometidas por los miembros de la Judicial Federal acantonados en la capital nayarita. Solo después de la agresión a la familia del gobernador la Procuraduría General de la República despidió de aquel lugar a un comandante y a un jefe de grupo, Enrique Martínez Sánchez y José Silva González.

En Oaxaca, el 6 de enero, un agente de la misma corporación, llamado José Luis Pérez o Marco Antonio Gallardo, pues hasta en la duplicidad de nombres se asemejan estos personajes a la delincuencia, insultó a un grupo de campesinos, tabacaleros que protestan por la supresión de Tabamex; lanzó sobre ellos el vehículo que tripulaba y finalmente les disparó. Lejos de amilanarse, estos campesinos, creyentes de que más balazos da el hambre, capturaron al agresor, pero de inme-

diato sus compañeros organizaron una zona, la descripción de los maleantes, el modus operandi. Por casualidad, los familiares de las víctimas entablaron contacto entre sí, hicieron trámites y realizaron sus propias investigaciones, hasta identificar a los agresores y sus vehículos. “Individuos y automóviles corresponden —dijo la periodista Sara Moirón en carta a *El Universal* la semana pasada— a miembros de la Policía Judicial Federal que trabajan bajo las órdenes del licenciado Javier Coello Trejo. Durante la reunión en que una de las víctimas identificó a sus agresores, estaba presente Fausto Valverde (jefe de los antinarcos, aclaramos nosotros), quien por todos los medios posibles trató de restar valor a la identificación plena que hacía una joven temblorosa, pero con valor suficiente para controlar su miedo y señalar a quienes la habían ofendido tan gravemente. Valverde desvirtuó todo lo hecho, y aunque no pudo cambiar el acta levantada, se tiene la impresión de que informó en forma equívoca a su jefe, el licenciado Coello Trejo. Hoy me entero de que Valverde ha sido destituido de su cargo y me pregunto si es el primer paso para hacer justicia”.

Otros episodios análogos pueden ser relatados. Estos dos son recientes, y aparecieron en los diarios del fin de semana. Se puede añadir a ellos el homicidio de un panista en Baja California, denunciado por el PAN, y por supuesto cometido por agentes federales. Se puede recordar, asimismo, el ya célebre, y terrible, asalto a la población duranguense de Ceballos. O al municipio michoacano de Aguililla. O a la zona de Guadalupe y Calvo, en la sierra tarahumara. O sus exacciones de fin de semana en Huejutla, Hidalgo. Los hechos referidos en esos casos, con toda su gravedad, sin embargo, son juegos de niños comparados con la monstruosidad que está ya tomando estado jurídico y que debe sacudir desde sus cimientos a esa agencia policiaca, y a la sociedad en general. Se trata de muchos casos de violación a mujeres, atacadas en el sur de la ciudad de México, por agentes antinarcótics, parapetados en la nobleza de su misión y convertidos en animales hasta ahora impunes.

Entre abril y diciembre del año pasado, fueron presentadas 14 denuncias por violación. Varios datos coincidían: la

Washington, como encarnación de los métodos mexicanos para librar de drogas a la sociedad norteamericana. “Son 19 jóvenes mujeres —añade Sara Moirón— las que fueron atacadas en plena calle, en lo que empezó con la apariencia de una investigación policiaca, siguió con el secuestro de la víctima que al llegar a un lugar oscuro y alejado —siempre en el sur de la ciudad—, fue golpeada y después brutalmente violada. Invariablemente, en cada uno de los 19 casos se repitió el mismo patrón”.

En manos y mentes enfermas está la persecución de los delincuentes, según evidencian estos hechos. Lejos de facilitar de inmediato la averiguación y el castigo de los presuntos responsables, la oficina de Coello Trejo parece empeñada en protegerlos. Como si gozaran de un fuero especial, en vez de que el ministerio público dé los pasos pertinentes, las Procuradurías federal y capitalina han formado una comisión y sólo hasta que su actuación concluya se verá qué hacer. No permitamos que así sea. Dijimos, en junio pasado, sorprendernos de la podredumbre que bullía en la Dirección Federal de Seguridad. No dejemos para cuatro o cinco años después de hoy la comprobación de la feroz arbitrariedad que reina en la Judicial Federal.

Y no nos quejemos de que el hipócrita puritanismo norteamericano nos exhiba en la televisión.